

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio

PROCESO No.	76001-23-33-004-2017-01649-00
DEMANDANTE	UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP
DEMANDADO	ENGRACIA ANGULO DE PRECIADO
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (Lesividad).

Santiago de Cali, Primero (01) de Julio Dos Mil veinte (2020)

El apoderado de la UGPP, con fundamento en el artículo 229 y siguientes del CPACA, solicita la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución No. 021097 del 4 de noviembre de 1997, mediante la cual se reconoció una pensión gracia a la señora Engracia Hermencia Angulo, pues a su juicio presenta irregularidad en su expedición.

La solicitud de suspensión provisional se sustenta en los siguientes argumentos:

- Que la señora Engracia Hermencia Angulo de Preciado, nació el 3 de abril de 1943 y prestó sus servicios como docente en instituciones educativas del orden territorial, lo cual la hacía merecedora del derecho a la pensión gracia con reconocimiento pensional a partir del estatus pensional.
- Que la demanda se encuentra razonadamente fundada en derecho, toda vez que la Resolución No. 021097 del 4 de noviembre de 1997, es contraria al ordenamiento jurídico, pues calculó la pensión gracia teniendo en cuenta el promedio de los factores salariales devengados al momento del retiro del servicio y no del año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionada de la demandada, es decir el 3 de abril de 1993, todo lo cual contraría la Ley 114 de 1913.
- Que se quebranta el principio de la estabilidad financiera del sistema pensional al realizarse un reconocimiento pensional al momento de retiro y no del estatus pensional contrariando el ordenamiento jurídico.

Por su parte el demandado manifestó en su defensa lo siguiente:

- Que la medida cautelar invocada por la entidad demandante, no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, como quiera que, de la revisión del acto cuestionado, no resulta evidente la presunta vulneración a normas superiores.

- Que la solicitud de la demandante es confusa y no especifica las normas que presuntamente se transgreden con la Resolución No. 021097 del 4 de noviembre de 1997. Por tanto, estima que en el evento de decretarse la medida cautelar, se menoscabarían sus derechos fundamentales, a la vida en condiciones dignas, el mínimo vital y la seguridad social.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Procede a definir el Despacho, constituido en Sala Unitaria, si es procedente decretar la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado, para lo cual se analizarán los requisitos que establece la ley 1437 de 2011, para su procedencia.

Marco jurídico sobre las medidas cautelares en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa

Dispone el artículo el 238 de la Constitución, que la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

Por su parte, el artículo 229 del CPACA establece que en todos los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Las medidas cautelares, pueden ser de carácter preventivo, conservativo, anticipativas o de suspensión y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, conforme lo regula el Artículo 230 Ibidem, del cual se destaca:

"Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

- 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.*
- 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.*
- 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.*
- 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.*
- 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.*

Parágrafo. *Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente. Donde la cuelgo*

Respecto a los requisitos para decretar la medida cautelar de suspensión provisional, de los efectos de los actos administrativos el artículo 231 Ibídem, establece lo siguiente:

"...Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos..."

CASO CONCRETO:

Como se señaló en el acápite anterior, en el examen de procedencia de la medida cautelar debe verificarse la concurrencia de los elementos que ameriten la imposición de la misma, tales como, la violación de las disposiciones normativas invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Además, que, cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

Se procederá a establecer si se cumplen dichos presupuestos en el caso concreto.

1) violación de normas superiores

Dicho presupuesto exige que las pretensiones del proceso aparezcan debidamente fundadas, que el demandante haya demostrado así sea sumariamente la pertinencia de la suspensión del acto enjuiciado, y se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho.

En el sub lite, la parte demandante no acreditó este requisito pues no señala las normas superiores presuntamente vulneradas, en razón a que solo refiere que es procedente la suspensión provisional de la Resolución No. 021097 del 4 de noviembre de 1997, como quiera que el cálculo de la pensión gracia, se efectuó sin tener en cuenta el promedio del salario devergado por la demandada en el año anterior a adquirir el estatus de pensionada, sino el correspondiente al momento del retiro del servicio.

Como fundamento de su petición indicó que el reconocimiento de un prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos legales, atenta contra el principio de Estabilidad Financiera de Sistema General de Pensiones, de manera que es procedente la medida de suspensión provisional.

En el presente asunto de las pruebas que obran en el plenario, se destacan:

- Resolución No. 021097 del 4 de noviembre de 1997, proferida por la Caja de Previsión Social, por medio de la cual se reconoció la pensión gracia a la señora Engracia Hermencia

Angulo, por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, efectiva a partir del 3 de abril de 1993. De la misma se destaca:

- "Que laboró un total de 9.725 días.*
- Que nació el 03 de abril de 1943 y cuenta con 52 años de edad.*
- Que el último cargo desempeñado fue el de docente en el Departamento del Valle del Cauca.*
- Que adquirió el estatus Jurídico el 3 de abril de 1993.*
- Que de acuerdo con las leyes 33 y 62 de 1985 aplicando el 75% sobre el salario promedio de 12 meses, se determina la cuantía de la pensión así:*

FACTOR	VALOR
Asignación básica	\$ 2.027.278.30
TOTAL FACTORES	\$ 2.027.278.30

Promedio: \$ 168.939.86 x 75%= \$ 126.704.89.

Que son normas aplicables: Leyes 4/66, 33/85, Decretos 81/76, 1848/69, 1045/78, 01/84, y cumple con los requisitos establecidos en la Ley 114/13-artículos 1,3,4. (fls. 66-68 C.1)

Ahora bien, analizado el acto administrativo cuestionado, no resulta palpable la violación que aduce la parte demandante, ya que, para establecer la normatividad aplicable para calcular la base de liquidación de la pensión gracia y sus correspondientes factores de salario, es necesario examinar y valorar diversos aspectos de carácter probatorio e interpretativo que no son propios de esta etapa procesal, por lo que no se advierte en este momento la violación normativa alegada por la entidad demandante.

En efecto, en el presente caso, como no se encuentra en entredicho el derecho pensional de la demandada, sino que se cuestiona la reliquidación de la prestación reconocida a la demandada, no resulta este el momento procesal oportuno para su definición, siendo su análisis propio del fallo definitivo.

Por lo anterior, el Despacho advierte que no se encuentra acreditado ninguno de los requisitos para que sea procedente la medida cautelar y, por tanto, será negada.

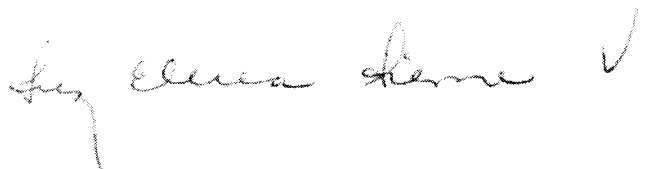
En consecuencia, se;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en la suspensión provisional de la Resolución No. 021097 del 4 de noviembre de 1997, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La Magistrada



LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

PROCESO No. 2017-01649-00